



Proceso Contencioso Administrativo
de Plena Jurisdicción.

Contestación de la demanda.

El Licenciado Luigi Colucci, actuando en nombre y representación de **Angie Cecibel Flores Pinto**, solicita que se declare nula, por ilegal, la Resolución 390 de 26 de agosto de 2019, emitida por el **Servicio Nacional de Migración**, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Señor Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia.

Acudo ante Usted de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, con el propósito de contestar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, descrita en el margen superior.

I. Los hechos en que se fundamenta la demanda, los contestamos de la siguiente manera:

Primero: No es un hecho; por tanto, se niega.

Segundo: No es un hecho; por tanto, se niega.

Tercero: No es un hecho; por tanto, se niega.

Cuarto: No es un hecho; por tanto, se niega.

Quinto: No es un hecho; por tanto, se niega.

Sexto: No es un hecho; por tanto, se niega.

Séptimo: No es un hecho; por tanto, se niega.

Octavo: No es un hecho; por tanto, se niega.

Noveno: No es un hecho; por tanto, se niega.

Es por ello, y de acuerdo a las constancias procesales, la entidad demandada y ante la existencia del informe proporcionado por el Consejo de Ética y Disciplina, el Servicio Nacional de Migración, procedió a emitir la Resolución 390 del 26 de agosto de 2019, mediante la cual la citada institución dejó sin efecto las Resoluciones 390-A del 19 de octubre de 2015 y la Resolución 667-A del 18 de abril de 2016, y que en la cual en todo momento respetó las garantías procesales a las que tenía derecho la hoy demandante.

En abono a lo anterior, esta Procuraduría estima necesario señalar que en el caso bajo análisis se cumplieron con los presupuestos de motivación consagrados en la Ley, puesto que en el considerando del acto acusado se establece de manera clara y precisa la justificación de la decisión adoptada por la institución; es decir, que la autoridad nominadora sustentó a través de elementos fácticos jurídicos los motivos por la cual se dejó sin efecto la las Resoluciones 390-A del 19 de octubre de 2015 y la Resolución 667-A del 18 de abril de 2016, mediante la cual se le reconocía, en ese entonces, a la hoy demandante, su incorporación a la Carrera Migratoria (Cfr. foja 21 y 22 del expediente judicial).

Finalmente, esta Procuraduría es de la opinión que, en el caso que ocupa nuestra atención, el Servicio Nacional de Migración, dio fiel cumplimiento a las fases que establece la Ley para este tipo de procedimiento; y respetó en todo momento el derecho que tenía **Angie Cecibel Flores Pinto**, puesto que en el mismo acto acusado de ilegal; es decir, la Resolución 390 del 26 de agosto de 2019, se establecen las disposiciones y las razones que sirvieron de fundamento para su emisión, y contra éste, la actora pudo interponer todos los recursos permitidos por la ley; actuación que evidencia que se le garantizó el debido proceso.

Lo expuesto hasta aquí, no hace más que evidenciar que la entidad demandada actuó con estricto apego a la normativa que regula la materia, por lo que no se han vulnerado el debido proceso, como de manera equivocada lo asevera la recurrente,

II. Disposiciones que se aducen infringidas.

El apoderado judicial de la demandante manifiesta que el acto acusado de ilegal vulnera las siguientes disposiciones:

A. Los artículos 36, 47, 62 y 155 de la Ley 38 de 31 de julio del 2000, mismos que establecen en su orden que ningún acto podrá emitirse o celebrarse con infracción de una norma jurídica vigente, aunque éste provenga de la misma autoridad que dicte o celebre el acto respectivo, además, señala que ninguna autoridad podrá celebrar o emitir un acto para el cual carezca de competencia de acuerdo con la ley o los reglamentos; que, se prohíben establecer requisitos o tramites que no se encuentren previstos en las disposiciones legales y/o en los reglamentos dictados para su debida ejecución, agrega, que constituye falta disciplinaria la violación de este precepto y será responsable de ésta el jefe o jefa del despacho respectivo; así mismo, indica que las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una resolución en forma en la que reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los siguientes supuestos: 1) si fuese emitida sin competencia para ello; 2) cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtenerla; 3) si el afectado consiente la revocatoria, y 4) cuando así lo disponga una norma especial. En ese mismo contexto, indica que en contra de la decisión de revocatoria o anulación el interesado puede interponer, dentro de los términos correspondientes, los recursos que le reconoce la ley, y que la facultad de revocar o anular de oficio un acto administrativo no impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundando en causa legal, cuando el organismo o funcionario administrativo no lo haya hecho; y por último, señala los actos que serán motivados con sucinta referencia (Cfr. fojas 9-12 del expediente judicial); y

B. Los artículos 18 (numeral 4), 128, 139 y 140 del Decreto Ejecutivo 138 de 4 de mayo de 2015, "Que Reglamenta el Título X del Decreto Ley 3 de 22 de febrero

de 2008, que crea el Servicio Nacional de Migración y la Carrera Migratoria y Deroga el Decreto Ejecutivo 40 de 16 de marzo de 2009 y el Decreto Ejecutivo 112 de 24 de febrero de 2014”, el cual establece que son funciones del Consejo de Ética y Disciplina del Ministerio de Seguridad Pública la de velar por la correcta aplicación del Procedimiento Ordinario y Procedimiento Especial de Ingreso, mediante la auditoría de expedientes previo reconocimiento del estatus de Carrera Migratoria; No podrán solicitar su ingreso a la Carrera Migratoria, a través del proceso especial de ingreso, aquellos servidores públicos que ocupen cargos de secretaria ejecutiva, asistente ejecutivo, asesores los cuales serán de libre nombramiento y remoción; así mismo, señala que le corresponde al Consejo de Ética y Disciplina velar por la correcta aplicación del procedimiento especial de ingreso y la emisión del certificado que confiere el estatus de Carrera Migratoria; por último que la condición de servidor público de Carrera Migratoria se perderá por la renuncia voluntaria manifestada por escrito u aceptada expresamente, resultado positivo de prueba de consumo de drogas ilícitas, luego de permitirle un proceso de rehabilitación del uso de drogas por el término de dos (2) años, la jubilación, pensión por vejez e invalidez permanente, y la condena con motivo de delito doloso, impuesta mediante sentencia ejecutoriada (Cfr. fojas 6-8 del expediente judicial).

III. Breves antecedentes del caso y descargos de la Procuraduría de la Administración, en representación de los intereses de la entidad demandada.

De acuerdo con la información que consta en autos, el acto acusado en la presente causa lo constituye la Resolución 390 de 26 de agosto de 2019, emitida por el **Servicio Nacional de Migración**, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución No. 390-A del 19 de octubre de 2015 y resolución 667-A del 18 de abril de 2016, mediante la cual se le reconoce a la servidora pública su incorporación en Carrera Migratoria

..." (La Negrita es de la cita) (Cfr. foja 22 del expediente judicial).

Debido a su disconformidad con el mencionado acto administrativo, la actora interpuso un recurso de reconsideración que fue decidido a través de la Resolución 437 de 18 de septiembre de 2019. Dicho pronunciamiento fue notificado a la prenombrada, el 19 de septiembre de 2019, quedando así agotada la vía gubernativa (Cfr. fojas 30-31 del expediente judicial).

En virtud de lo anterior, el 24 de enero de 2020, **Angie Cecibel Flores Pinto**, actuando por medio de su apoderado especial, presentó ante la Sala Tercera la demanda que dio origen al proceso que ocupa nuestra atención, en el que solicita que se declare nula, por ilegal, la resolución acusada (Cfr. fojas 2-14 del expediente judicial).

Al expresar el concepto de violación del artículo 140 del Decreto Ejecutivo 138 de 4 de mayo de 2015, señaló lo siguiente: *"La disposición transcrita ha sido violada de manera directa por omisión, pues se desconoció su texto claro que indica cuáles son las circunstancias y presupuestos que pueden motivar o producir la pérdida de la condición de servidor público de Carrera Migratoria, sin que, por ningún lado, se aluda expresamente al incumplimiento del requisito de ingreso alusivo a la auditoría previa del Consejo de Ética y Disciplina; o a que en un expediente no se visualice la auditoría previa del Consejo de Ética y Disciplina, que fue el único motivo o razón que esbozó la Dirección General del Servicio Nacional de Migración, para cancelar a la funcionaria Flores Pinto su reconocimiento como servidora pública de Carrera Migratoria..."* (Cfr. foja 6 del expediente judicial).

Así mismo, en lo que respecta al artículo 155 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, expresó lo siguiente: *"La disposición transcrita ha sido violada de manera directa por omisión, pues se desconoció su texto claro que indica que, entre otros, los actos que afecten derechos subjetivos, deben ser motivados con adecuada referencia de los hechos"*

y fundamento de derecho. La Resolución N° 390 de 26 de agosto de 2019 y su medida confirmatoria, sin duda, supone actos que afectan derechos subjetivos, dado que están dejando sin efecto o cancelando el reconocimiento administrativo que tiene Flores Pinto como Servidora Pública incorporada al régimen de Carrera Migratoria. No obstante, al examinar su contenido, claramente se desprende que se tratan de actos que no se ajustan al principio de la debida motivación consagrado en el artículo 155 de la Ley N° 38 de 31 de julio de 2000, que exige sustentar con el correcto y suficiente fundamento de hecho y de derecho la decisión o medida emitida” (Cfr. foja 9 del expediente judicial).

Por último, en lo que respecta al artículo 62 de la Ley 38 de 32 de julio de 2000, señaló lo que a continuación se cita: *“La disposición transcrita ha sido violada de manera directa por omisión, pues se desconoció su texto claro que indica los precisos supuestos que le permiten a la autoridad pública, oficiosamente, revocar o anular una resolución administrativa en firme” (Cfr. foja 10 del expediente judicial).*

Este Despacho se opone a los cargos de ilegalidad expuestos por la hoy demandante en relación con las disposiciones legales que aduce han sido infringidas con la expedición de la resolución objeto de controversia, según pasamos a explicar de manera conjunta.

En efecto, debemos destacar que el Informe Explicativo de Conducta SNM-URG-AT de 29 de junio de 2019, la entidad demandada, señaló lo siguiente:

“...Tal es el caso de la Señora ANGIE CECIBEL FLORES PINTO, con cédula de identidad personal No.6-707-2110. La cual fue nombrada mediante Decreto Personal No. 286 de 04 de abril de 2013 en el Servicio Nacional de Migración, hasta el 09 de octubre de 2019, fecha en la cual se dejó (sic) sin efecto su nombramiento, decisión que fue reconsiderada por la misma, por lo que mediante Resuelto No. 1300 del 10 de diciembre de 2019, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, resolvió mantener el contenido del Decreto Personal No. 642 del 08 de octubre de 2019.

Consta en el expediente de personal de la Señora ANGIE CECIBEL FLORES PINTO, durante su permanencia en la institución, la misma se desempeñó

en puestos de entera confianza, ocupando diversos cargos de alto grado de responsabilidad y cercanía con la Dirección General y otros.

... ” (Cfr. fojas 63 y 64 del expediente judicial).

Aunado a lo anterior, y tal como se desprende del Informe de Conducta, el acto acusado de ilegal tuvo su origen como consecuencia de la Nota 044-19 de 20 de julio de 2019, misma que fue emitida por el Consejo de Ética y Disciplina, como garante de la transparencia del proceso especial y ordinario de ingreso al régimen de Carrera Migratoria, hizo de conocimiento a la Dirección General del Servicio Nacional de Migración que el proceso de acreditación de **Angie Cecibel Flores Pinto**, se dio en contravención con lo dispuesto en el artículo 18 (numeral 4) y el artículo 139 del Decreto Ejecutivo 138 de 4 de mayo de 2015. Las normas en comento, establecen lo siguiente:

“**Artículo 18.** Son funciones del Consejo de Ética y Disciplina las siguientes:

1...

...

4. Velar por la correcta aplicación del Procedimiento Ordinario y Procedimiento Especial de Ingreso, mediante la auditoría de expedientes previo reconocimiento de estatus de Carrera Migratoria.

...” (Lo destacado es nuestro).

“**Artículo 139.** Corresponderá al Consejo de ética y Disciplina velar por la correcta aplicación del procedimiento especial de ingreso y la emisión del certificado que confiere el estatus de Carrera Migratoria” (La negrita es nuestra).

Cabe agregar que, contrario a lo indicado por la recurrente, su incorporación a la carrera migratoria se dio de manera irregular, toda vez que la misma no contó con la auditoría previa que debía realizar el Consejo de Ética y Disciplina del Servicio Nacional de Migración, tal cual se desprende del informe de conducta. Veamos:

“Mediante Nota No. 044-19 de 20 de julio de 2019, el Consejo de Ética y Disciplina, como garante de la transparencia del proceso especial y ordinario de

ingreso al régimen de Carrera Migratoria, según se estipula en el Decreto Ejecutivo No. 138 del 04 de mayo de 2015, hace del conocimiento de la Dirección General del Servicio General de Migración, que luego de haber revisado minuciosamente el proceso de acreditación de la Señora **ANGIE CECIBEL FLORES PINTO**, dicha acreditación se dio en contravención a lo establecido en el artículo 18, numeral 4 y 139 del decreto Ejecutivo No. 138 del 04 de mayo de 2015, toda vez que en el expediente de Carrera Migratoria no reposa certificación de auditoría de expediente realizada por este Consejo impidiéndole a este cumplir con sus Funciones.

Según el criterio del Consejo de Ética y Disciplina, la acreditación del (sic) Señora **ANGIE CECIBEL FLORES PINTO**, fue realizada en contravención de lo que estipula la Ley 9 de 22 de junio de 1994 y el Decreto Ejecutivo No. 138 del 04 de mayo de 2015.

Posteriormente y ante la existencia de dicho informe por parte del Consejo de Ética y Disciplina, se procede a dejar sin efecto la Resoluciones No. 390-A del 19 de octubre de 2015 y la Resolución No. 667-A del 18 de abril de 2016, por el cual se acreditó a la señora **ANGIE CECIBEL FLORES PINTO**, en el régimen de carrera migratoria, la cual al ser notificada, la hoy demandante hizo uso de recurso de reconsideración, el cual fue resuelto manteniéndose el contenido de la Resolución No. 390 del 26 de agosto de 2019, misma que dejaba sin efecto su condición de servidor Público de Carrera Migratoria en el Servicio Nacional de Migración...

..." (La negrita es nuestra) (Cfr. foja 64 del expediente judicial).

A juicio de este Despacho, y del contenido de las piezas procesales que reposan en autos, se aprecia que si bien mediante las Resoluciones Resoluciones No. 390-A del 19 de octubre de 2015 y la Resolución No. 667-A del 18 de abril de 2016, reconocía a **Angie Cecibel Flores Pinto**, su incorporación a la Carrera Migratoria; no es menos cierto que la misma era personal de confianza de sus superiores, motivo por el cual **no podía ingresar de manera regular al Sistema de Carrera Migratoria.**

razón por la cual solicitamos que dichos cargos de infracción sean desestimados por la Sala Tercera.

En el marco de los hechos cuya relación hemos expuesto en los párrafos precedentes, esta Procuraduría solicita a los Honorables Magistrados se sirvan declarar que **NO ES ILEGAL la Resolución 390 de 26 de agosto de 2019, emitida por el Servicio Nacional de Migración** y, en consecuencia, se desestime las demás pretensiones de la demandante.

IV. Pruebas:

4.1. Se **aducen** como prueba documental de esta Procuraduría, la copia autenticada del expediente administrativo que guarda relación con este caso.

V. Derecho: No se acepta el invocado por la recurrente.

Del Honorable Magistrado Presidente,


Rigoberto González Montenegro
Procurador de la Administración


Mónica I. Castillo Arjona
Secretaria General